

## **INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE I+D+I DE CASTILLA-LA MANCHA**

Se ha recibido en este Gabinete Jurídico petición de informe de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre el asunto de referencia.

El presente informe se emite en virtud del artículo 10.1 a) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A la vista de la consulta y examinado el contenido del expediente que la acompaña, se tiene el honor de evacuar el presente informe sobre la base de los siguientes

### **ANTECEDENTES**

#### **PRIMERO. CONSULTA.**

La consulta, recibida en este Gabinete Jurídico el pasado 28 de agosto de 2025, es del siguiente tenor: “Le envío proyecto de decreto que a continuación se relaciona, así como el expediente administrativo completo, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1.a de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, emita el preceptivo informe. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN Y CLASIFICACIÓN Y EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA DE I+D+I DE CASTILLA-LA MANCHA.”



## SEGUNDO. EXPEDIENTE.

La antedicha consulta se acompaña de expediente compuesto de veinticinco documentos junto con un índice numerado, conforme al cual la documentación que contiene es la siguiente:

1. Consulta pública previa.
2. Memoria justificativa.
3. Resolución autorización Consejero.
4. Primer borrador Decreto.
5. Informe jurídico primer borrador Decreto.
6. Segundo borrador Decreto.
7. Informe jurídico segundo borrador Decreto.
8. Proceso participativo.
9. Tercer borrador Decreto.
10. Informe protección de datos.
11. Memoria económica.
12. Informe de Impacto demográfico.
13. Informe de cargas.
14. Segunda memoria económica.
15. Informe DG Función Pública.
16. Informe DG Presupuestos.
17. Informe Inspección General de Servicios.
18. Informe Servicio de Estadística.
19. Cuarto borrador Decreto.
20. Información pública.
21. Quinto borrador Decreto
  - 21.1 Formulario solicitud alta-renovación-variación.
  - 21.2 Plantilla lista infraestructuras equipamiento.



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 366FB45947532B74AFB859

21.3 Formulario inventario alta-variación-baja de infraestructuras y equipamiento.

- 22. Informe de Impacto de género.
- 23. Informe jurídico quinto borrador Decreto.
- 24. Informe de la Secretaría General.
- 25. Solicitud informe Gabinete Jurídico.

### **TERCERO. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO.**

El quinto borrador del proyecto de Decreto, sobre el que se emite el presente informe, consta de una parte expositiva o preámbulo, treinta y dos artículos estructurados en tres capítulos, una disposición adicional y tres disposiciones finales.

El preámbulo o parte expositiva se refiere al marco normativo y competencial a nivel autonómico y estatal; a la necesidad y oportunidad de la norma y los objetivos perseguidos; y a los principios de buena regulación, a saber, los de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

El capítulo I, que lleva por rúbrica “Disposiciones Generales”, comprende los dos primeros artículos. El artículo 1 establece el objeto de la norma, esto es, *“establecer el régimen de acreditación y clasificación y el registro electrónico de agentes del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, en adelante SIDICAM”*. El artículo 2 delimita el ámbito de aplicación de la norma.

El capítulo II, bajo la rúbrica de “Clasificación y acreditación como agentes del SIDICAM”, comprende los artículos 3 a 19. El artículo 3 regula la clasificación de los agentes del SIDICAM. Los artículos 4 a 6 establecen los requisitos generales de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica, de los grupos de investigación, y de las personas físicas, respectivamente, para acreditarse como agente del SIDICAM. Los artículos 7 a 11 establecen los requisitos específicos



para acreditarse en el SIDICAM como universidad, instituto de investigación, centro de investigación o centro tecnológico, como instituto universitario de investigación, como agente innovador empresarial, como agente de ejecución y como entidad singular, respectivamente. Los artículos 12 a 15 regulan el procedimiento de acreditación, distinguiendo las competencias e inicio del procedimiento, la acreditación de oficio, la acreditación a solicitud de otras personas o entidades interesadas, y la instrucción y resolución del procedimiento de acreditación como agente del SIDICAM iniciado mediante solicitud de las personas o entidades interesadas. El artículo 16 regula la renovación de la acreditación como agente del SIDICAM. El artículo 17 prevé la comunicación de la variación de datos de agentes del SIDICAM. El artículo 18 regula la revocación de la acreditación como agentes del SIDICAM. El artículo 19 establece el régimen de recursos contra las resoluciones definitivas de los procedimientos de acreditación, renovación, pérdida de vigencia o revocación.

El capítulo III, bajo la rúbrica de “Registro de agentes del SIDICAM e inventario de infraestructuras y equipamientos”, comprende los artículos 20 a 32, que se estructuran en dos secciones. La sección primera establece el “Registro de agentes del SIDICAM” y comprende los artículos 20 a 26, en los que se regula la creación, adscripción, naturaleza y objetivos del registro de agentes del SIDICAM, el objeto de la inscripción, la hoja registral, los efectos de la inscripción, los derechos y deberes derivados de la inscripción, el acceso al registro y protección de datos, y las actividades estadísticas. La sección segunda disciplina el “Inventario de infraestructuras y equipamientos” y comprende los artículos 27 a 32, en los que se regula el objeto y requisitos, la hoja registral, la solicitud de inscripción de infraestructuras o equipamientos en el registro de agentes del SIDICAM, la resolución del procedimiento de inscripción, la solicitud de modificación o baja de la inscripción, y la resolución del procedimiento de modificación o baja de la inscripción de infraestructuras o equipamientos en el registro de agentes del SIDICAM.



La disposición adicional única regula el periodo transitorio, estableciendo un periodo transitorio de un año desde la entrada en vigor de este decreto para que las personas físicas, las personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica soliciten la acreditación como agente del SIDICAM.

La disposición final primera establece el régimen jurídico, remitiéndose supletoriamente a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La disposición final segunda prevé una habilitación de desarrollo normativo en favor de la persona titular de la consejería con competencias en materia de I+D+I. La disposición final tercera versa sobre la entrada en vigor del Decreto.

A tales antecedentes les son de aplicación las siguientes

## CONSIDERACIONES JURÍDICAS

### PRIMERA. NATURALEZA DEL INFORME.

El informe que se solicita es de naturaleza preceptiva y no vinculante.

En efecto, el artículo 10.1.a), de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dispone que *“corresponde al Gabinete Jurídico emitir dictamen en derecho, con carácter preceptivo, en los siguientes asuntos: a) Los anteproyectos de leyes y los proyectos de disposiciones reglamentarias de carácter general.”*

Añade el apartado 5.b) del mismo artículo que *“los informes de los letrados del Gabinete Jurídico no son vinculantes, salvo que alguna norma así lo establezca.”*



## SEGUNDA. MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL.

Como recoge el preámbulo del Proyecto de Decreto, la Constitución Española, en el artículo 44.2, prevé que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, atribuyendo en su artículo 149.1.15ª la competencia exclusiva al Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Por su parte, el artículo 148.1.17ª de la Constitución prevé que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de fomento de la investigación.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 31.1.17ª, la competencia exclusiva para el fomento de la cultura y de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 149 de la Constitución. Por otro lado, el artículo 37.3 establece que la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, fomentará la investigación, especialmente la referida a materias o aspectos peculiares de Castilla-La Mancha, y la creación de centros universitarios en la región. Por último, en virtud de lo establecido en el artículo 31.1.1ª, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

En ejercicio de esta atribución competencial se aprobó la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, que constituye el marco general en Castilla-La Mancha para la regulación de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y la promoción de un entorno favorable para la generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del conocimiento en el marco del sistema castellanomanchego de I+D+I.

La Ley 4/2020, de 10 de julio, establece en su artículo 3, apartado c), entre sus objetivos generales, el *“estimular las interrelaciones en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación entre las*





*administraciones, las empresas, las universidades y los centros tecnológicos y de investigación y los ciudadanos radicados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y proveer de mecanismos e instrumentos que faciliten la transferencia de conocimiento al sector productivo, preservando una investigación e innovación inclusiva, sostenible y, en definitiva, responsable".* En relación con este objetivo, el artículo 15 de la mencionada ley, en su apartado 1, identifica los agentes que forman parte del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, mientras que en su apartado 4 se establece que *"reglamentariamente se regulará el sistema de clasificación, acreditación y registro de los agentes del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha"*.

El artículo 16 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, establece que la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro público de agentes del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, donde se inscribirán las instituciones, organismos y entes públicos que formen parte de la Administración Autonómica y desarrollen funciones de investigación, así como las instituciones, empresas y organismos de los sectores público y privado que perciban fondos que la Comunidad Autónoma destine a los fines previstos por la ley. Los investigadores que llevan a cabo su trabajo en instituciones públicas o privadas de Castilla-La Mancha habrán de estar inscritos en el registro siempre que desarrollen su actividad investigadora subvencionada en todo o parte con programas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este registro incluirá también el inventario de infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha. Además, se regulará reglamentariamente la organización y funcionamiento del registro, junto con las condiciones mínimas exigibles para ser inscrito.

El proyecto normativo que ahora informamos se articula como un reglamento ejecutivo o de desarrollo de la referida Ley 4/2020, al amparo de los artículos 15.4 y 16.4, además de la disposición adicional primera de la Ley que, bajo la rúbrica de "Desarrollo reglamentario", establece que *"se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para dictar las*



*disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley”.*

### **TERCERA. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN.**

El artículo 36 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispone:

*“1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la facultad de sus miembros para dictar normas reglamentarias en el ámbito propio de sus competencias.*

*2. El ejercicio de dicha potestad requerirá que la iniciativa de la elaboración de la norma reglamentaria sea autorizada por el Presidente o el Consejero competente en razón de la materia, para lo que se elevará memoria comprensiva de los objetivos, medios necesarios, conveniencia e incidencia de la norma que se pretende aprobar.*

*3. En la elaboración de la norma se recabarán los informes y dictámenes que resulten preceptivos, así como cuantos estudios se estimen convenientes.*

*Cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite.*

*Se entenderá cumplido el trámite de información pública cuando las asociaciones y organizaciones representativas hayan participado en la elaboración de la norma a través de los Órganos Consultivos de la Administración Regional.*

*4. De no solicitarse dictamen del Consejo Consultivo, por no resultar preceptivo ni estimarse conveniente, se solicitará informe de los servicios jurídicos de la Administración sobre la conformidad de la norma con el ordenamiento jurídico.*





*5. El Consejo de Gobierno remitirá a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha los dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo en relación con los Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones”.*

Las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2023, en relación con los Acuerdos del Consejo de Gobierno relativos a los Anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones generales de naturaleza reglamentaria, señalan:

*“Para la toma en consideración de los anteproyectos de Ley y para la aprobación de disposiciones generales de naturaleza reglamentaria por el Consejo de Gobierno será imprescindible que los mismos vayan acompañados de la documentación que a tales efectos se encuentre señalada en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo y en la demás normativa de aplicación, y en concreto:*

*a) Propuesta de acuerdo a adoptar por el Consejo de Gobierno. Vendrá transcrito y firmado en original por el miembro del Consejo proponente en el impreso denominado “Extracto de expediente para el Consejo de Gobierno”.*

*b) Texto íntegro que se propone, que incluirá necesariamente la parte expositiva, dispositiva y final de la norma. Vendrá transcrito en el impreso denominado “Extracto de expediente y disposición general”, dejando en blanco el número y fecha que pueda corresponder a la disposición, que serán asignados tras su aprobación.*

*c) Memoria conteniendo los objetivos, conveniencia e incidencia, así como una evaluación económica del coste a que dé lugar. Se deberá incluir en la memoria un estudio sobre las alternativas y los impactos que la iniciativa tendrá sobre los siguientes ámbitos:*



*1º. Desde el punto de vista jurídico, incluyendo una tabla de derogaciones y de afecciones al orden constitucional y estatutario de competencias.*

*2º. Desde el punto de vista presupuestario, indicando los efectos sobre el ingreso y gasto.*

*3º. Desde el punto de vista de la competencia y su impacto en la competitividad de las empresas, en el supuesto que les afecte.*

*4º. Desde el punto de vista de la simplificación administrativa y la reducción de cargas, deberán incluir –comparando la normativa preexistente y la que se propone– la medición concreta de cargas eliminadas y los trámites que se han simplificado (inicio electrónico, supresión de informes, silencio positivo, notificación electrónica, ...).*

*La memoria podrá incluir además cualquier otro extremo que, a criterio del órgano proponente, pudiera ser relevante para la aprobación del proyecto.*

*d) Informe de impacto de género.*

*e) Informe del impacto demográfico.*

*f) Informe de la Inspección General de Servicios sobre la normalización y racionalización de los procedimientos administrativos cuando el proyecto contenga normas de este carácter.*

*g) Informe de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería proponente.*

*h) Por razón de las distintas materias en que, no constituyendo el objeto principal de la misma, pudiera incidir la norma, informes de las siguientes Consejerías:*

*1º. La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas cuando el anteproyecto normativo afecte a la organización, procedimiento o régimen de personal de la Administración Regional.*



*2º. La Consejería competente en materia de educación cuando afecte al personal docente.*

*3º. La Consejería competente en materia de sanidad cuando afecte a personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.*

*4º. La Consejería competente en materia de hacienda cuando el proyecto suponga incremento de gasto o disminución de ingreso para la Hacienda regional.*

*5º. De cualquier otra Consejería que pudiera resultar competente por razón de la materia.*

*i) Informe del Gabinete Jurídico.*

*j) Cualquier otro informe emitido por los órganos competentes que sea requerido de conformidad con la normativa sectorial de aplicación.*

*k) Informe del Consejo Consultivo cuando sea preceptivo.*

*l) Ficha para publicación en el Portal de Transparencia.”*


Asimismo, deben tenerse en consideración las previsiones sobre la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones que regula el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con la documentación obrante en el expediente remitido a este Gabinete Jurídico, se han realizado los siguientes trámites:

- a) Consulta pública previa, que consta como documento 1 del expediente, y que estuvo abierta desde el día 16 de noviembre de 2023 hasta el día 29 de noviembre del mismo año. Se incluye un informe con el resultado de la consulta pública previa. Con ello se entienden cumplidas las previsiones sobre consulta pública previa establecidas en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las



Administraciones Públicas. Asimismo, la consulta pública responde a las previsiones contenidas en el Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dictan instrucciones sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa.

- 
- b) Memoria de análisis de impacto normativo, del Director Gerente de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, de 17 de junio de 2024, que figura como documento 2 del expediente. La memoria se completa con una memoria económica de 6 de febrero de 2025 (documento 11 del expediente) y con una segunda memoria económica de 11 de febrero de 2025 (documento 14 del expediente). Con ello se da cumplimiento al apartado c) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, antes referidas.
- c) Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes por la que se autoriza la elaboración y tramitación del proyecto de decreto por el que se regula el registro, la acreditación y la clasificación de los agentes del sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha, de 18 de junio de 2024, obrante como documento 3 del expediente. Con ello se da cumplimiento al artículo 36.2 de la Ley 11/2003.
- d) Informe de impacto de género, de la Secretaría General, de 21 de julio de 2025, que consta como documento 22 del expediente. Con ello se da cumplimiento al apartado d) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, antes referidas.
- e) Informe de impacto demográfico, de la Directora Gerente de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, de 6 de febrero de 2025, que obra como documento 12 del expediente. Con ello se da cumplimiento al apartado e) de las Instrucciones sobre el régimen

administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, antes transcritas.

- f) Informe de la Inspección General de Servicios sobre la adecuación a la normativa vigente en materia de normalización y racionalización de procedimientos administrativos, de 20 de febrero de 2025, y que consta como documento 17 del expediente. Con ello se da cumplimiento al apartado f) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, antes referidas.
- g) Informe de la Secretaría General de la Consejería proponente del proyecto de decreto, de 27 de agosto de 2025 y que obra como documento 24 del expediente. Con ello se da cumplimiento al apartado g) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
- h) Informe en materia de protección de datos, emitido el 31 de enero de 2025. Consta como documento 10 del expediente.
- i) Informe sobre racionalización y simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas, de 7 de febrero de 2025, y que obra como documento 13 del expediente.
- j) Informe de la Dirección General de Función Pública, de 11 de febrero de 2025 y que consta como documento 15 del expediente.
- k) Informe de la Dirección General de Presupuestos, de 11 de febrero de 2025 y que consta como documento 16 del expediente.
- l) Informe del Servicio de Estadística de la Oficina del Dato de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 25 de febrero de 2025, y que consta como documento 18 del expediente.



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 366FB45947532B74AFB859

m) Proceso participativo, que consta como documento 8 del expediente y que se extendió del día 14 de octubre de 2024 al 25 de octubre del mismo año. Con ello se da cumplimiento a las previsiones establecidas por la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La Mancha.

n) Trámite de información pública, que consta en el documento 20 del expediente, y que se extendió del día 3 de abril de 2025 al día 6 de mayo de 2025. Con este trámite se tiene por cumplido lo previsto en el artículo 36.3 de la Ley 11/2003.

A los anteriores trámites e informes se añaden los informes jurídicos sobre los borradores 1º, 2º y 5º del proyecto de decreto, elaborados por el Servicio Jurídico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, fechados el 23 de julio de 2024, el 2 de septiembre de 2024 y el 21 de julio de 2025, respectivamente. Estos informes constan como documentos 5, 7 y 23 del expediente remitido a este Gabinete Jurídico.

De conformidad con la normativa vigente aplicable a la tramitación de un proyecto de decreto, resulta necesario realizar e incorporar al expediente, con carácter previo a la remisión del proyecto al Consejo de Gobierno para su aprobación, los siguientes trámites:

- a) Informe del Gabinete Jurídico, al amparo del 10.1 a) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, objeto del presente documento.
- b) Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, al amparo del artículo 54.4 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que establece que *“el Consejo Consultivo deberá ser consultado en los siguientes asuntos: [...] 4.*





*Proyectos de Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones.”*

#### **CUARTA. IMPACTO NORMATIVO.**

El artículo 39 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, establece:

*“La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe ejercer su potestad e iniciativa normativas con sujeción a los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, asimismo, a los siguientes:*

*a) Elaboración de las memorias utilizando los instrumentos de análisis más adecuados para evaluar los efectos de la nueva regulación y evitar que se generen obligaciones o gastos innecesarios o desproporcionados con respecto a los objetivos de interés general que se pretenden alcanzar [...]”.*

El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece también obligaciones de análisis de impacto normativo, con carácter básico, en sus apartados 4 y 7:

*“4. [...] Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. [...]*

*7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”*



Se ha llevado a cabo el preceptivo análisis de impacto normativo, en particular a través de las memorias e informes siguientes:

- a) Memoria de análisis de impacto normativo, junto con las dos memorias económicas posteriores.
- b) Informe de impacto de género.
- c) Informe de impacto demográfico.
- d) Informe sobre la adecuación a la normativa vigente en materia de normalización y racionalización de procedimientos administrativos.
- e) Informe sobre racionalización y simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas.
- f) Informe de la Dirección General de Función Pública.
- g) Informe de la Dirección General de Presupuestos.

A la vista de todo ello, las constataciones de los técnicos competentes confirman, en síntesis, los siguientes extremos:

- a) Ausencia de impacto de género.
- b) Impacto neutro en materia demográfica.
- c) Cumplimiento de la normativa sobre racionalización y simplificación de procedimientos administrativos.
- d) Ausencia de impacto sobre el régimen de personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- e) Impacto económico de unos 40.000 euros, correspondientes a gastos de personal ya dotados presupuestariamente.
- f) Ausencia de impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia.
- g) Ausencia de impacto sobre las personas con discapacidad.

Con ello se tiene por cumplido el preceptivo análisis de impacto normativo que debe preceder a la aprobación de toda norma jurídica y que, en lo que nos afecta, impone el citado artículo 39.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.



## QUINTA. PRINCIPIOS DE NECESIDAD, EFICACIA, PROPORCIONALIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA.

Continuamos glosando el ya citado artículo 39 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha:

*“La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe ejercer su potestad e iniciativa normativas con sujeción a los principios establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, asimismo, a los siguientes: [...]”*

*b) Obtención de un marco normativo previsible, estable y fácil de conocer y comprender para los ciudadanos y los agentes económicos y sociales, de forma que la aprobación de la nueva norma conlleve, como regla general una simplificación del ordenamiento jurídico vigente [...]”.*

Por remisión, el citado artículo 129 de la Ley 39/2015 consagra los siguientes principios de buena regulación:

*“1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.*

*2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.*

*3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir*



*con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.*

*4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. [...]*

*5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.*

*6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.”*

En el presente caso se constata que:

- a) Se expresan en el preámbulo los fines de interés general y objetivos que se persiguen.
- b) La regulación que se establece es la imprescindible para cumplir los objetivos perseguidos.
- c) Se ha hecho efectiva la participación activa de los destinatarios de la norma en su elaboración a través de los trámites de consulta previa y de información pública.



Por todo ello, consideramos debidamente acreditado el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia y eficiencia.

## **SEXTA. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.**

El precitado artículo 39 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, exige que el marco normativo sea *“fácil de conocer y comprender para los ciudadanos y los agentes económicos y sociales”*; de igual modo, el antedicho artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prescribe que el marco normativo sea *“claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas”*.

Con base en lo anterior, y en observancia del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, procedemos a continuación a realizar una serie de propuestas de modificación, que sistematizaremos en función de la vertiente del principio de seguridad jurídica a la que pretender servir.

### **A) CORRECCIÓN Y CLARIDAD**

Para lograr un marco normativo claro y de certidumbre y facilitar su conocimiento y comprensión, en primer lugar, consideramos aconsejable una revisión general del texto desde el punto de vista sintáctico, gramatical y conceptual. El rigor y la exactitud en el uso del lenguaje son presupuesto necesario y antecedente lógico de la claridad normativa, que a su vez es un componente esencial de la seguridad jurídica. Asimismo, la claridad normativa requiere, en la medida de lo posible, un empleo coherente de la terminología en el texto, así como evitar las reiteraciones innecesarias de una misma disposición.

De acuerdo con ello, se formulan las siguientes propuestas de modificación del proyecto de decreto:





a) El **artículo 2** del proyecto establece que “*Este decreto será de aplicación a los agentes del SIDICAM previstos en el artículo 15.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. Asimismo, de conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, será de aplicación para las infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del SIDICAM*”.

Se propone la siguiente redacción: “*Este decreto será de aplicación a los agentes del SIDICAM previstos en el artículo 15.1 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. Asimismo, de conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, será de aplicación a las infraestructuras y equipamientos de los entes públicos del SIDICAM*”.

Con ello se utiliza la misma fórmula sintáctica en ambos supuestos (“ser de aplicación a alguien o algo”).

b) El **artículo 3.h** del proyecto de decreto establece: “*Entidades singulares: entidad de divulgación, cuya función fundamental es promover la difusión del conocimiento científico y de los resultados de la I+D+I hacia la sociedad u otras entidades relacionadas con la I+D y no encuadradas en los tipos anteriores*”.

Se observa que, a lo largo del texto normativo se utiliza la expresión I+D+I, excepto en el precepto transcrito, en que se utiliza la expresión I+D. Salvo que para este supuesto concreto se pretenda excluir la innovación, haciendo exclusiva referencia a la investigación y el desarrollo, se aconseja hacer uso de la expresión I+D+I, en coherencia con el resto del texto normativo.

Por ello, se propone la siguiente redacción: “*Entidades singulares: entidad de divulgación, cuya función fundamental es promover la difusión del conocimiento científico y de los resultados de la I+D+I hacia la sociedad u otras entidades relacionadas con la I+D+I y no encuadradas en los tipos anteriores*”.





c) El **artículo 3.I** del proyecto de decreto establece: *“Personal gestor: profesional que presta servicios en puestos de trabajo con funciones especializadas en tareas de planificación, administración y control de centros, proyectos y actividades del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha.”*

Se recomienda mencionar el sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha como SIDICAM en toda referencia posterior al artículo 1, que establece expresamente que *“el presente decreto tiene por objeto establecer el régimen de acreditación y clasificación y el registro electrónico de agentes del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, en adelante SIDICAM”*. Con ello se mantiene la coherencia en el texto normativo.

Por ello, se propone la siguiente redacción del artículo 3.I: *“Personal gestor: profesional que presta servicios en puestos de trabajo con funciones especializadas en tareas de planificación, administración y control de centros, proyectos y actividades del SIDICAM”*.

d) El **artículo 4.1.b)** establece, entre los requisitos para acreditarse como agentes del SIDICAM las personas jurídicas y los entes sin personalidad jurídica: *“Tener centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Para el caso de los clústeres, las entidades que componen esta agrupación deben tener un centro de trabajo en Castilla-La Mancha.”*

La redacción del proyecto puede interpretarse en dos sentidos. Bien que cada una de las entidades que componen el clúster debe tener un centro de trabajo en Castilla-La Mancha, o bien que basta con que una de ellas tenga un centro de trabajo en territorio castellanomanchego. Para evitar ambigüedades interpretativas, se proponen como posibles redacciones alternativas las siguientes, en función del alcance del requisito que se pretenda establecer:

*“Tener centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Para el caso de los clústeres, cada una de las entidades que componen esta agrupación deben tener un centro de trabajo en Castilla-La Mancha.”*



O bien, alternativamente:

*“Tener centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Para el caso de los clústeres, al menos una de las entidades que componen esta agrupación debe tener un centro de trabajo en Castilla-La Mancha.”*

Con cualquiera de las dos redacciones alternativas propuestas se puede evitar la ambigüedad del requisito relativo a los clústeres.

e) El **artículo 6** establece, en su primer inciso, que *“Para acreditarse como agente del SIDICAM, la persona física solicitante deberá reunir los siguientes requisitos [...]”*. Se propone como redacción alternativa: *“Para acreditarse como agente del SIDICAM, la persona física deberá reunir los siguientes requisitos [...]”*.

Con la redacción propuesta se respeta la fórmula utilizada en los artículos 4 y 5, donde no se hace referencia alguna al carácter de “solicitante” de las entidades a las que se refieren tales preceptos. Adicionalmente, consideramos que los requisitos que se establecen tienen naturaleza estrictamente sustantiva, por lo que incluir el término “solicitante”, que es una cuestión procedimental, resulta innecesario.

f) El **artículo 12.2 y 3** establece:

*“[...] 2. La acreditación se efectuará de oficio, mediante la resolución correspondiente, con relación a las entidades y personas contempladas en el artículo 13.*

*3. Respecto al resto de entidades y personas no incluidos en el apartado anterior, el procedimiento para la acreditación como agente del SIDICAM se iniciará a instancia de la persona jurídica, ente sin personalidad jurídica, grupo de investigación o persona física interesada mediante la presentación de la solicitud a través del formulario incluido en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (<https://www.jccm.es/>). A esta solicitud se acompañará la documentación a la que se refiere el artículo 14.*



*Dicha solicitud para ser acreditado como agente del SIDICAM se presentará de forma telemática, con firma electrónica. [...]*

Por su parte, los artículos 13.1 y 14.1 reproducen íntegramente las previsiones anteriores, por lo que se propone la eliminación de los apartados 2 y 3 del artículo 12. Con ello se evita una innecesaria reiteración de mandatos que no contribuyen a la claridad y concisión de la norma.

g) El **artículo 13.4** establece que *“La acreditación de oficio se realizará mediante resolución de la persona titular de la Gerencia de INNOCAM.”* Por su parte, el artículo 12.1 dispone que *“La acreditación como agente del SIDICAM corresponde a la Gerencia de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, en adelante INNOCAM, siendo el área de Servicios de INNOCAM el órgano instructor del procedimiento”*.

Con ello, el artículo 13.4 establece a qué órgano corresponde la resolución que acredita como agente del SIDICAM cuando se trata de la acreditación de oficio, reiterando la regla general prevista en el artículo 12.1. Por consiguiente, y en coherencia con los artículos 14 y 15, que no contienen una previsión semejante cuando se trata de la acreditación a instancia de interesado, se propone la supresión del artículo 13.4 y, en su caso, la siguiente redacción alternativa del artículo 12.1: *“La acreditación como agente del SIDICAM se realizará mediante resolución de la persona titular de la Gerencia de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, en adelante INNOCAM, siendo el área de Servicios de INNOCAM el órgano instructor del procedimiento”*.

h) El **artículo 16.4** establece que *“Finalizada la vigencia de la acreditación sin que se haya solicitado la renovación de la misma conforme a lo dispuesto en este artículo, se dictará resolución por la persona titular de la Gerencia de INNOCAM declarando la pérdida de vigencia de la acreditación, siendo comunicada esta circunstancia a la entidad o persona interesada”*.

Se propone la siguiente redacción: *“Finalizada la vigencia de la acreditación sin que se haya solicitado su renovación, se dictará resolución por la persona titular*



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 366FB45947532B74AFB859

de la Gerencia de INNOCAM declarando la pérdida de vigencia de la acreditación, que será notificada a la entidad o persona interesada”.

Con la modificación propuesta se dota a la redacción de una mayor claridad, en línea con la directriz 101 de las Directrices de técnica normativa. Asimismo, se respetan los criterios de la Real Academia en cuanto que no recomienda el uso de la expresión “la renovación de la misma”, siendo preferible “su renovación”. Así se establece en la tercera entrada del término “mismo -ma” del Diccionario Panhispánico de Dudas. Y, respecto de la modificación del inciso “*siendo comunicada esta circunstancia*” por “*que será notificada*”, la propuesta se fundamenta, por un lado, en la coherencia léxica del resto de la norma, en que se utiliza la expresión “notificar” y, por otro lado, el adecuado uso del lenguaje jurídico-administrativo, en que, por regla general, los actos administrativos se notifican a los interesados. Además, la supresión de la expresión “*esta circunstancia*” evita que pueda entenderse que lo que se notifica (o comunica) al interesado es la pérdida de vigencia de la acreditación, cuando en sentido estricto lo que debe notificársele no es la pérdida de vigencia en sí misma, sino la resolución que la declara.

i) El **artículo 18.1** dispone que “*La persona titular de la Gerencia de INNOCAM podrá revocar la acreditación como agente del SIDICAM, por incumplimiento total o parcial de los requisitos que fundamentaron la acreditación, por la falta de concesión de la renovación prevista en el artículo 16, o por el incumplimiento del plazo de comunicación de la variación de datos establecida en el artículo 17*”.

La redacción propuesta (“*podrá revocar*”) parece articular la revocación de la acreditación como una actuación facultativa de la persona titular de la Gerencia de INNOCAM, cuando concorra alguna de las circunstancias referidas en el precepto. Si, por el contrario, se pretende articular como una actuación preceptiva cuando concurren las circunstancias expresadas, se considera preferible la siguiente redacción: “*La persona titular de la Gerencia de INNOCAM revocará la acreditación como agente del SIDICAM, por incumplimiento total o parcial de los requisitos que fundamentaron la acreditación, por la falta de*



*concesión de la renovación prevista en el artículo 16, o por el incumplimiento del plazo de comunicación de la variación de datos establecida en el artículo 17”.*

j) El **artículo 23.1** establece que *“La inscripción en el registro de agentes del SIDICAM supone el reconocimiento, por parte de la Administración autonómica, de que una entidad, persona o estructura organizativa reúne los requisitos establecidos a tal efecto para ser considerada como agente del SIDICAM de un determinado tipo, según la clasificación que se establece en el artículo 3, y el reconocimiento de la aptitud para la realización de las actividades de I+D+I en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.*

En observancia del principio de claridad, consideramos conveniente la revisión del precepto transcrito, pues el reconocimiento por parte de la Administración autonómica de que una entidad, persona o estructura organizativa reúne los requisitos para ser considerada como agente del SIDICAM, de acuerdo con el régimen previsto en los artículos 4 a 15 del proyecto de decreto, tiene lugar con la resolución del procedimiento de acreditación. Entendemos que, de conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 4/2020, al que se remite expresamente el artículo 20.3 del proyecto de decreto, el principal efecto de la inscripción es dar publicidad al reconocimiento como agentes del SIDICAM.

k) El **artículo 27.1 y 2** utiliza, por un lado, la expresión *“entes públicos del SIDICAM”* y, por otro lado, la expresión *“entes públicos de I+D+I de Castilla-La Mancha”*. Se propone el uso, en ambos apartados, de una de las dos denominaciones, en caso de que ambos apartados pretendan referirse al mismo conjunto de entes públicos. Con esta propuesta se favorece la sistemática en la terminología utilizada y se facilita la comprensión e interpretación de la norma.

l) El **artículo 28** establece que *“A cada infraestructura o equipamiento se le abrirá una hoja registral electrónica, en la que constará el código registral que se le asigne, el precio público de utilización, ubicación y datos de contacto”*. Si bien puede inferirse que en la hoja registral se hará constar adicionalmente la descripción de la infraestructura o equipamiento correspondiente, consideramos



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 366FB45947532B74AFB859



conveniente su expresa mención, en observancia del principio de claridad y de seguridad jurídica.

Por ello, se propone como redacción alternativa la siguiente: “A cada *infraestructura o equipamiento* se le abrirá una hoja registral electrónica, en la que constará su descripción, el código registral que se le asigne, el precio público de utilización, ubicación y datos de contacto”.

m) El **artículo 30.3** dispone que “La validez de la inscripción de una *infraestructura o un equipamiento* en el registro de agentes del SIDICAM será *indefinida*”. Se propone como redacción alternativa la siguiente: “La eficacia de la inscripción de una *infraestructura o un equipamiento* en el registro de agentes del SIDICAM será *indefinida*”.

Con la propuesta de modificación se pretende distinguir la validez de un acto, que depende del cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de su eficacia o producción de efectos. Alternativamente, se puede utilizar el término *vigencia*, aunque se considera preferible optar por *eficacia*.

n) El **artículo 31.2** establece que “*La baja de una infraestructura o un equipamiento inscrito en el registro de agentes del SIDICAM se realizará de forma telemática, con firma electrónica, mediante la solicitud correspondiente disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha (<https://www.jccm.es>)*”.

Se observa que, a diferencia de lo que sucede en el artículo 31.1 para el caso de la solicitud de modificación, en el caso de la solicitud de baja no se establece expresamente quién debe promoverla ni tampoco el plazo para realizar la solicitud. Consideramos conveniente que se incluyan estos elementos, en línea con lo previsto en el apartado precedente.





## B) PRINCIPIO DE COHERENCIA

El artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al que venimos haciendo referencia, establece como requisito de seguridad jurídica que *“la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado [...]”*.

Entendemos que, para asegurar el conocimiento y comprensión de la norma, la coherencia debe predicarse tanto en el seno del propio texto como en relación con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto a lo primero, la coherencia interna se refiere a la propia sistemática, estructura y organización del texto normativo. En cuanto a lo segundo, el principio de seguridad jurídica exige que el ordenamiento jurídico sea un conjunto sistemático y armónico, no una mera acumulación abigarrada y heteróclita de normas dispares e inconexas.

A continuación, haremos una serie de propuestas de modificación del texto que, a nuestro entender, mejorarían su coherencia, comenzando por la perspectiva interna para pasar después a la externa.

### **Perspectiva interna.**

La doctrina del Consejo de Estado relativa a los principios de buena regulación ha venido insistiendo en la necesidad de observar los criterios de *“sedes materiae”* y de *“a rubrica”*, esto es, de ordenar cada precepto o mandato en la ubicación sistemática más acorde con su naturaleza y contenido. Véase, por todos, el Dictamen del Consejo de Estado de 5 de diciembre de 2001 sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora de la Concesión de Obras Públicas: *“En el desempeño de su función consultiva, el Consejo de Estado percibe las distorsiones que, con creciente intensidad, se siguen de la incorrecta incorporación al ordenamiento jurídico de iniciativas normativas que no observan*



*las ventajas de situar cada norma en las "sedes materiae" que, presupuesta la conformación del ordenamiento en su conjunto a partir de criterios lógicos y sistemáticos, sea su ubicación normal".*

Con base en estos principios, entendemos que la estructura y sistemática del texto podrían verse favorecidas reubicando o reordenando determinados preceptos.

Así, el capítulo I comprende el artículo 1, relativo al objeto de la norma, y el artículo 2, relativo a su ámbito de aplicación. Por su parte, el capítulo II, que comprende los artículos 3 a 19, regula la clasificación de los agentes del SIDICAM (artículo 3), los requisitos generales de acreditación como agentes del SIDICAM (artículos 4 a 6), los requisitos específicos para la referida acreditación (artículos 7 a 11) y el procedimiento de acreditación (artículos 12 a 19).

De conformidad con el punto 19 de las Directrices de técnica normativa, las definiciones deben incluirse dentro de las disposiciones generales de la norma, que en este proyecto comprenden el capítulo I. El artículo 3, si bien toma el nombre de "*Clasificación de agentes del SIDICAM*", incluye la definición de los distintos sujetos afectados por la norma, por lo que se considera más adecuada su inclusión en el capítulo I del proyecto de decreto.

En la misma línea, entendemos adecuado dedicar el capítulo II a los requisitos y procedimiento de acreditación como agentes del SIDICAM. Además, entendemos conveniente distinguir dentro de tal capítulo dos secciones, relativas, respectivamente, a los requisitos generales y específicos de acreditación (artículos 4 a 11) y al procedimiento de acreditación (artículos 12 a 19). Con ello se clasifican, dentro del capítulo II, los preceptos de carácter sustantivo de aquellos que tienen naturaleza procedimental.

### **Perspectiva externa.**

El Tribunal Supremo tiene declarado que *"es importante tener presente que el ordenamiento jurídico no se halla integrado en compartimentos estancos [...] sino*



Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 366FB45947532B74AFB859

que, por el contrario, constituye un todo interrelacionado en el que se impone una interpretación integradora de sus diversas previsiones como forma única de llevar a cabo la aplicación congruente de sus disposiciones.” Por todas, sentencia de la Sala Cuarta, de 28 de diciembre de 2000, rec. 646/2000.

Por tanto, *de lege ferenda*, debe coheretarse el contenido de cada proyecto con la normativa preexistente, para asegurar que toda iniciativa normativa mantiene una relación armónica y coherente con el resto del ordenamiento jurídico en el que está llamada a integrarse.

El preámbulo del proyecto de decreto comienza, en su primer párrafo, con una referencia al marco constitucional de relevancia para la norma. En primer lugar, afirma que “*La Constitución Española, en el artículo 44.2, obliga a los poderes públicos a promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general [...]*”. Entendemos más adecuada la redacción “*La Constitución Española, en el artículo 44.2, dispone que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”*. El cambio propuesto ajusta la redacción de la norma a la dicción literal del texto constitucional. A ello se añade que los mandatos contenidos en el artículo 44 se encuentran ubicados sistemáticamente en el capítulo III del título I de la Constitución, bajo la rúbrica de los “Principios rectores de la política social y económica”, y éstos, si bien pueden tener la consideración de obligaciones de los poderes públicos en sentido amplio, no se consideran como verdaderas obligaciones en sentido técnico-jurídico, por cuanto sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, tal como resulta del artículo 53.3 de la propia Constitución.

En segundo lugar, el mismo párrafo primero del Preámbulo establece que “[...] correspondiendo a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.17, el fomento de la investigación entre otras competencias”. Se propone la redacción siguiente: “*De acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.17ª, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de fomento de la investigación*”. El cambio propuesto viene justificado



por el hecho de que el artículo 148 de la Constitución no atribuye directamente competencias a las Comunidades Autónomas, sino que permite que las mismas, a través de sus Estatutos de Autonomía, asuman las competencias sobre las materias relacionadas en el mismo. En consecuencia, las competencias sobre las materias enumeradas en el artículo 148 de la Constitución corresponderán, en su caso, a una Comunidad Autónoma si las ha asumido a través de su Estatuto de Autonomía.

En tercer lugar, el párrafo quinto del preámbulo dispone que *“El artículo 16 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, establece que la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro de agentes del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, donde estarán inscritos tanto organismos públicos como privados que desarrollen actividades de investigación e innovación o perciban fondos que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha destine a actuaciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación [...]”*. Se propone la siguiente redacción: *“El artículo 16 de la Ley 4/2020, de 10 de julio, establece que la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha creará y gestionará un registro público de agentes del sistema de I+D+I de Castilla-La Mancha, donde se inscribirán las instituciones, organismos y entes públicos que formen parte de la Administración Autonómica y desarrollen funciones de investigación, así como las instituciones, empresas y organismos de los sectores público y privado que perciban fondos que la Comunidad Autónoma destine a los fines previstos por la ley”*.

La redacción incluida en el quinto borrador del proyecto parece incluir la obligación de inscripción en el registro de los organismos privados que desarrollen actividades de investigación e innovación, con independencia de que reciban o no fondos de la Administración autonómica a tales efectos. Ello excede la previsión del artículo 16 de la ley, que para el caso de instituciones, empresas y organismos del sector privado únicamente prevé la obligación de inscripción cuando perciban fondos que la Comunidad Autónoma destine a los fines



previstos por la ley. Por ello, se considera adecuada la redacción propuesta, que se ajusta a los términos previstos por la ley.

### **SÉPTIMA. ENTRADA EN VIGOR Y VACATIO LEGIS.**

La disposición final tercera del proyecto prevé su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, adscribiéndose al plazo general previsto en el artículo 2 del Código Civil. Se considera adecuado, desde una perspectiva jurídica, tanto para permitir el conocimiento de la norma por los destinatarios de ésta como para articular la organización administrativa precisa para que se alcancen los fines previstos en el proyecto de decreto.

Debe observarse que la directriz 42.f de las Directrices de técnica normativa establece que “[...] *la entrada en vigor se fijará preferentemente señalando el día, mes y año en que haya de tener lugar [...]*”. No obstante, se considera adecuado el establecimiento de la *vacatio legis* por referencia a un plazo de veinte días desde la publicación oficial, al responder a la previsión general subsidiaria contenida en el Código Civil.

### **CONCLUSIÓN**

Por lo expuesto, a la vista de la documentación remitida, y de conformidad con lo dispuesto artículo 10.1.b) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, efectuadas las propuestas de modificación referidas y advertido el carácter preceptivo del Dictamen del Consejo Consultivo, se informa FAVORABLEMENTE el proyecto normativo sometido a consulta.



Es todo cuanto este Gabinete tiene el honor de informar, no obstante, V.I. resolverá lo más acertado.

En Toledo, a fecha de firma

Letrado de la JCCM

Directora General de los Servicios Jurídicos

D. Juan José Gil Muñoz

D<sup>a</sup> Belén López Donaire

Documento Verificable en [www.jccm.es](http://www.jccm.es) mediante  
Código Seguro de Verificación (CSV): 366FB45947532B74AFB859